



Entrevista con el gobernador José Reyes Baeza Terrazas

Lo más nocivo del narcotráfico es el consumo

OLGA GARCÍA

José Reyes Baeza Terrazas, gobernador de Chihuahua, fue presidente municipal de la capital del estado (1998-2001) y luego diputado federal (2001-03). Nacido en Delicias en 1961, es abogado de profesión.

La entidad que gobierna ha sido escenario de sangrientos enfrentamientos entre bandas delinuenciales y entre éstas y los cuerpos policiacos. En el momento de realizar la entrevista el número de víctimas se acercaba las mil personas.

Ante ello el gobernador Baeza establece que “el combate al crimen organizado es constitucionalmente responsabilidad formal del gobierno de la República, es al gobierno federal a quien le compete legal y ministerialmente la investigación de esos delitos. Nosotros averiguamos los del fuero común y hemos resuelto muchos casos, muchos homicidios.”

¿Qué es lo más nocivo del narcotráfico?

El consumo. En materia de adicciones no teníamos un problema tan grave como hoy. El país tiene muchos años, décadas, siendo un territorio de cruce de estupefacientes. Muchos estados, no sólo los de la frontera norte han sido históricamente zonas de tráfico de droga. El gran problema es que ahora se queda –aunque la mayoría cruza–, incrementado el narcomenudeo, la venta de pequeñas dosis en las esquinas y de manera creciente y alarmante, el consumo de drogas.

El fenómeno del narcotráfico tiene muchas vertientes, y estamos atendiendo una de manera contundente, la convocatoria del presidente Calderón: el combate frontal al narcotráfico; pero me parece que nos vamos a quedar cortos si no saneamos el problema de millones de adictos que tenemos en todo el país, no hay centros de rehabilitación ni en cantidad, ni en calidad, para atenderlos.

¿Qué hace para que el narcotráfico no se filtre a instancias gubernamentales?

Estamos haciendo verificaciones de confianza permanentes, exámenes antidoping. Cuando fui presidente municipal utilizamos este procedimiento desde el primer año de administración, y me incluí como jefe de gobierno.

Los mandos de seguridad pública se someten a estas pruebas, entre ellas, al polígrafo, para evitar que el narcotráfico penetre o se infiltre en las estructuras del poder público y en los cuerpos de seguridad. Son formas de monitoreo, fiscalización y evaluación. Es imposible tener un blindaje 100% efectivo, pero si la policía y los funcionarios saben que hay instrumentos de medición tendrán más precaución. Los exámenes de confianza y el antidoping forman parte de un programa permanente en Chihuahua, como lo está implementando ahora el gobierno federal.

Pero Chihuahua tiene otros problemas, además del narcotráfico, y de ellos habla el gobernador minutos antes de iniciar un viaje, a Casas Grandes, uno de los 67 municipios de Chihuahua, dice a manera de retrato de la entidad:

“Es la más extensa de la República, 247 mil kilómetros cuadrados, y con un territorio de contrastes: desierto, llanura, barranca y sierra. Esta última abarca la tercera parte del territorio estatal donde habitan cuatro etnias: pimas, guarijíos, tepehuanes y tarahumaras; además de éstas están los menonitas.

“Chihuahua pasó de dedicarse a la actividad primaria a la industrial en las últimas tres o cuatro décadas. Hoy día ha logrado un equilibrio entre ambas: impulsando la minería, la agricultura, la explotación forestal, el desarrollo turístico, comercial e industrial, la ganadería; y posicionándose como una de las entidades con más capacidad de



atracción de inversión extranjera. Juárez-El Paso, es la tercera región de América en empleos de manufactura, después de Chicago y Los Ángeles, y primera en la República.

“Las dos universidades públicas: la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) están entre las más importantes del país, tienen prácticamente el 100% de sus matrículas incorporadas a programas de calidad. Sólo cuatro universidades están ahora en ese estatus; la de Juárez será la cuarta, y la de Chihuahua la quinta, esto en el marco de nuestro proyecto educativo.

“Tenemos un gran flujo migratorio de la República y eso genera problemas diversos en la vivienda, en el desarrollo social y en la seguridad, ésta no sólo vinculada al crimen organizado, sino a delitos del fuero común. Somos la quinta economía del país y el número doce en población, con tres millones y medio de habitantes aportamos 4.5% del producto interno bruto. Ocupamos el primer lugar en producción de oro, chile jalapeño, y el segundo en plata a nivel nacional.”

¿Qué reformas ha propuesto y qué dificultades han encontrado?

A lo largo de estos tres años y medio de gobierno se han impulsado varias, destacaré dos o tres:

La procesal penal integral que va desde los juicios orales, las reformas a las leyes y reglamentos para mejorar la aplicación de la justicia de barandilla –confiriendo facultades más amplias a las municipales para coadyuvar con el trabajo de la procuraduría en ciertos casos– hasta el sistema alternativo de justicia que privilegia la conciliación y la negociación para evitar saturar al poder Judicial y los centros penitenciarios. Implementamos alternativas para buscar acuerdos entre las partes y evitar que se siga adelante en asuntos de menor cuantía: daño en propiedad ajena –de tres mil, cuatro mil pesos– injurias, lesiones leves y robos menores.

Incorporamos los juicios orales y la figura novedosa del juez de garantía, otra instancia que privilegia la conciliación entre las partes y acorta los tiempos de la aplicación de la justicia, un asunto que duraba dos años, ahora se puede resolver en dos semanas. El sistema tradicional está colapsado por excesos burocráticos y esta reforma permite recuperar la confianza de la población en las institu-

ciones de justicia penal. Está en vigor en la capital y en Juárez, ciudades que representan 64% de la población. En el resto del estado, en 67 municipios, de los cuales 24 están ubicados en la sierra, empezará a funcionar a principios del próximo año.

Por otro lado, promovimos una ley de transparencia y rendición de cuentas de los tres poderes del estado. Llegamos un poco tarde a la transparencia, pero según el IFAI, nuestra ley es vanguardia en el país.

Desde Chihuahua surgió también la iniciativa, junto con otros tres gobernadores, de reformar el artículo sexto constitucional, de tal suerte que estableciera la necesidad de que las leyes locales en materia de transparencia tengan ciertos parámetros para evitar tanta disparidad entre unas y otras, porque luego hay de chile y de manteca; unas son flexibles y laxas y, otras, más rígidas y severas, que finalmente es a lo que debemos aspirar. Una ley que ponga controles para que los tres poderes y todas las dependencias en el sector público brinden a la sociedad la información que solicita en un término específico, bajo ciertas reglas y sanciones, en caso de incumplimiento.

Usted habló del empuje que le han dado a la educación. ¿Del presupuesto inicial considerado para este rubro se ha sacrificado algo para destinarlo a otro?

No, del presupuesto anual del estado, 30 mil millones de pesos, prácticamente destinamos 50% a educación; en todos sus conceptos: infraestructura, profesionalización, capacitación y gasto operativo. Hay más de un millón 50 mil estudiantes en las aulas: desde el nivel básico hasta posgrado. Somos uno de los cinco estados del país que más destina a su proyecto educativo y en ninguno de los años de la administración se ha desplazado su presupuesto a otro renglón.

La educación es y seguirá siendo prioritaria en lo que resta de mi gobierno, ésta y la cultura son ejes rectores del plan estatal y el mejor instrumento para ganar la verdadera batalla contra la delincuencia. Sabemos la importancia de apostarle a las armas, pero lo es más recuperar el espacio que hemos perdido en este terreno.

Pasemos al tema de las mujeres de Juárez.

Ese problema se suscitó a partir de 1993 de manera muy señalada. De entonces a la fecha el fenómeno del *feminicidio* ha despertado especial atención;

hubo un par de años, particularmente uno, en el que se encontró una osamenta en el Campo Algodonero y otra, en el Cristo Negro, en Juárez.

De 1993 a principios de 2008, se han registrado poco más de 400 asesinatos.

El tema del feminicidio debe ubicarse como tal, debe tener ciertas características: se priva de la vida a la mujer por odio a la mujer, por ser mujer. No es lo mismo la muerte que se da en un evento del crimen organizado, por ejemplo.

Debo decir también que siendo un problema real, importante y preocupante, no es Chihuahua –ni Juárez– la entidad federativa con mayor número de incidentes violentos contra mujeres. Según la investigación realizada por la Comisión Plural de Diputadas del Congreso de la Unión, formada para este fin, señala que si bien es cierto en Ciudad Juárez es una problemática, es mucho más grave en otras ciudades, refiero esto para contextualizar, no para deslindar responsabilidades. El problema más grave tratándose del *feminicidio* es la impunidad. En Juárez, en el pasado, se cometieron 30 crímenes delictivos en un año y se resolvieron tres o cuatro. Nosotros hemos resuelto muchos más que en administraciones pasadas.

En 2006 y 2007 la incidencia fue de un promedio de 15-16 muertes por año, cuando antes era de 30-32, esto indica que si se baja la impunidad, también la criminalidad.

Nuestro principal reto en este momento es resolver los casos del Campo Algodonero y del Cristo Negro porque ahí encontramos 7-8 osamentas de mujeres, todos los demás homicidios tienen otro comportamiento. Las investigaciones indican que en la mayor parte había una relación entre víctima y

victimario: eran parejas sentimentales, novios, concubinos, esposos; salvo los dos casos que mencioné y que estamos investigando con apoyo de las autoridades estadounidenses. En Estados Unidos hubo algunas detenciones, hay evidencia muy contundente, como nunca antes, y espero muy pronto dar a conocer el resultado nacional e internacionalmente. Hemos avanzado en el combate a la impunidad pero reconozco que nos falta mucho por hacer.

¿Cuántos casos se han resuelto y cuáles son los estados donde se comenten más crímenes contra mujeres?

Todavía tenemos en investigación 130 asuntos, más o menos. En los restantes ya hay detenidos, consignados, procesados, sentenciados o a punto de veredicto porque las pesquisas están adelantadas y hay elementos para vincular a alguien en el proceso.

La mayor parte de los 130 eventos que estamos indagando son crímenes del pasado, sin dejar de mencionar que algunos se han cometido en los últimos dos años. Tenemos que combatir la impunidad; si no se castiga a los responsables se tiene un delito creciente, está comprobado científicamente que el delincuente actúa por imitación. O la persona que no habiendo privado de la vida nunca a alguien puede actuar por imitación sabedor de que no se castiga. En relación con otros estados, no los menciono porque pareciera como que...

Es competencia.

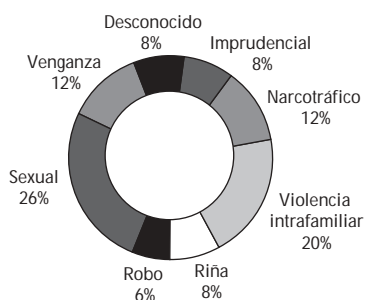
Sí, como si fuera competencia. Hay documentos de la Comisión Plural de Diputadas del Congreso donde mencionan estadísticas entidad por entidad. En Chihuahua, durante 2004, comparados con otros años, hubo una incidencia más o menos alta, más que en 2005, 2006 y 2007, incluso lo que va de 2008, reconociendo que este año tenemos un comportamiento diferente, con más casos que en 2007. Pero en 2004 a pesar de que se registraron más muertes, Chihuahua estaba en octavo lugar a nivel nacional. Se sigue hablando de Ciudad Juárez y de Chihuahua porque desde 1993 se las ubicó con esta situación, pero desafortunadamente es un fenómeno nacional y mundial.

El caso de los indígenas en Chihuahua es emblemático por sus etnias, ¿se ha legislado en relación a ellos?

En todas las reformas hemos tomado en cuenta su idiosincrasia, lengua y dialecto. En el caso de la re-

Gráfica 1. Porcentaje de cada móvil en los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez

Fuente: Elaborado por la SRE con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua.





forma penal, incorpora apartados para el tratamiento específico de la impartición de justicia, si no hay un traductor que hable la lengua de estas etnias se puede cometer una gran injusticia.

Hemos ido modificando leyes para adecuar en el trato de justicia correcto a los indígenas de la sierra, en la que hay cuatro etnias, con una población de 150 mil personas, bastante menor a la de estados como Oaxaca o Chiapas. Hablo nada más de la población distribuida en más de 20 municipios de la sierra. Allí hay alrededor de 6 mil comunidades, con menos de cien habitantes cada una, en algunas hay 10, 15 o 20 familias. Llevar hasta allá un libro de texto, un medicamento, un médico, una enfermera, una atención es muy complejo.

Mencionaré dos o tres acciones específicas.

En el programa *Manos a la obra*, hay una dependencia que se llama Coordinadora Especial de la Tarahumara, el año pasado invertimos en estos programas más de 1 500 millones en materia de programas productivos, atención médica, vivienda. Estamos impulsando la construcción de centros de recuperación materno-infantil –ahora hay casi 40– para evitar muertes en el embarazo, el parto y posparto. Allí, entre otras, se suministra dosis de ácido fólico a las mamás para disminuir malformaciones congénitas, y se atiende a más de 5 mil niños.

Hay más de 100 albergues en la sierra, y debo decir que 42-43 de ellos están en malas condiciones, los demás se han reconstruido; y acabamos de firmar un convenio en coordinación con la Comisión para los Pueblos Indígenas y la Fundación del Empresario Chihuahuense para reconstruirlos, para cada uno se requiere tres millones de pesos, estamos hablando de más de 120 millones. Allí se reciben niños de diferentes comunidades y se quedan toda la semana: duermen, comen, estudian y tienen acceso a internet.

Chihuahua, el estado grande

Capital:	Chihuahua
Extensión:	247 455 km ² , el 12.6% del territorio nacional
Población:	3 241 444 habitantes, 3.1% del total del país
Número de municipios:	67
Distribución de la población:	84% urbana y 16% rural
Escolaridad:	8.3 años
Hablantes de lengua indígena:	3 de cada 100 personas
Aportación al PIB nacional:	4.3%

Iniciamos un programa en coordinación con la CFE y con la comisión para el Desarrollo de Pueblos Indígenas para –de aquí a 2010– electrificar todas las poblaciones serranas de más de 100 habitantes, y en donde hay menos de éste número iniciamos un programa para instalación de módulos de celdas solares.

Estamos construyendo varios ramales de carreteras y comenzaremos la construcción del aeropuerto de Creel, en el municipio de Bocoyna. Hay un programa muy ambicioso para la sierra, más allá del asistencialismo. Llevar infraestructura para que pueda llegar el turismo y el turismo genera riqueza en la sierra para sus habitantes.

¿Qué tanto se respeta su cultura con estos proyectos, y cuántos recursos del sector turismo se recaudan gracias a los indígenas?

Se respeta. Muchos han migrado a la ciudad porque a veces, en temporada seca –en Chihuahua hay escasa precipitación fluvial, aunque el año pasado y antepasado fueron un poco mejores– la agricultura de temporal de los indígenas, de traspatio, para su subsistencia personal y familiar se pone en riesgo. Hemos tratado de respetar su cultura, su identidad, sus costumbres porque, además, ellos no permiten intromisiones. Las etnias de acá tienen su cultura muy arraigada. No se pueden llevar a un fraccionamiento en la cabecera municipal con viviendas, pavimento, agua, energía eléctrica; su cultura es vivir en la lejanía, en contacto con la naturaleza. Los hemos respetado, por eso llevamos servicios y los apoyos institucionales allá, a la propia sierra tarahumara.

Hay mucho ecoturismo local, nacional y europeo, por eso queremos mejorar la infraestructura para que venga más gente. El aeropuerto regional de Creel hará parte de ello.

En la idea de traer más ecoturismo a la sierra tenemos un proyecto muy ambicioso para las Barrancas del Cobre, una de las maravillas más importantes de México y del mundo.

¿Cuál es su posición en relación con el muro que se construye en la línea fronteriza?

Hemos fijado una posición de total cesura y rechazo a su construcción. Lo llamamos el Muro de la ignominia, que se construye por gente que pretende encontrar una medida idónea para resolver un problema migratorio que tiene décadas, siglos, y



que es bastante más complejo que eso; porque se va a seguir dando, somos vecinos; y además, los trabajadores mexicanos representan un factor importante para la economía estadounidense, sobre todo en la actividad agrícola. Son posiciones políticas, partidarias, que lastiman el orgullo, la dignidad de las personas y se pone en riesgo la buena relación binacional y lo más grave: la integridad física de los migrantes. Estas medidas extremistas, radicales, fundamentalistas conminan o convocan a perseguir y a cazar a los migrantes.

Tenemos una excelente relación con Texas y Nuevo México, con Bill Richardson, y hemos fijado aquí y allá nuestro rechazo a la construcción de un muro que limita y desconoce años de historia, de raíces compartidas, porque en el sur de EU hay miles de mexicanos y chihuahuenses. Ésa no es la vía idónea para resolver un problema tan complejo, sociológicamente hablando, como es la migración.

¿Cuál es su interpretación de las reformas que se han hecho a propósito del federalismo?

El verdadero federalismo, que cumple con las expectativas de los estados y de los municipios, tiene que ver con el federalismo hacendario. En la Convención Nacional Hacendaria convocada por iniciativa de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) si bien es cierto se dio un debate teórico y dogmático, también hubo acuerdos y avances en la materia. Esto habla de la voluntad de los actores políticos del país para buscar formas de fortalecer el federalismo, en particular, el hacendario; no obstante, el presidente de la República –independientemente de quien se trate y del partido al que pertenezca– sigue teniendo un peso importante.

Los gobernadores estamos buscando fórmulas para que con reformas constitucionales se cedan mayores facultades tributarias a los estados, o para compartir facultades con la Federación, no sólo a los ingresos petroleros sino al cobro del impuesto a la gasolina, al tabaco, al alcohol y a la tenencia de vehículos. Estamos en ese proceso pero, sin pretender despojar a la presidencia de sus facultades, falta avanzar muchísimo más.

¿Hay convenios con los estados vecinos del norte, particularmente con los de Estados Unidos?

Hemos fortalecido mucho más nuestra relación por razón de problemas más o menos comunes. Ade-

más de la CONAGO tenemos un foro en el que nos reunimos los gobernadores del norte de México y del sur de EU que va más allá del mero protocolo; una conferencia operativa en la que se trabajan acuerdos en temas de seguridad y cruces fronterizos, infraestructura y migración, entre otros.

En materia de seguridad se ha llegado a un convenio de intercambio de información, para que si es detenida una persona en otra entidad con orden de aprehensión en Chihuahua se sepa de inmediato. Estamos buscando el suministro de energía eléctrica para los próximos diez años de la industria en general, no sólo en la maquiladora; y con los gobiernos mexicano y norteamericano queremos encontrar cómo agilizar los trámites de varios cruces fronterizos.

¿Qué soluciones se han planteado para aliviar los problemas ambientales del estado?

El impacto más nocivo que tenemos es la descarga de la industria pesada en el medio ambiente y el excesivo parque vehicular. Por ejemplo, en ciudades como Bogotá con ocho millones de habitantes hay 1.2 millones de vehículos, uno por cada 7 habitantes; en Chihuahua, capital, con una población de 850 mil, hay 450 mil vehículos, un coche por cada dos habitantes; muchos de ellos importados, algunos ilegalmente, con el impacto adicional que son modelos atrasados. El cabildo de Chihuahua acaba de aprobar la verificación vehicular para evitar emisiones contaminantes al medio ambiente.

Con los gobernadores fronterizos estamos tratando el tema de las energías renovables, proponiendo nuevas formas de suministro, entre otras, aprovechando los gases de los rellenos sanitarios sobre todo de los desechos orgánicos. Por otro lado, Chihuahua ocupa el primer lugar nacional en tratamiento de aguas residuales, con más del 65% de infraestructura para tratar aguas usadas –la media nacional debe estar en el 40%– y el compromiso de esta administración es que para el 2010 lleguemos al 85%. También hay planes para limpiar y conservar los cauces de los ríos y los arroyos en la ciudad, son proyectos muy específicos que ayudan a reducir el maltrato ecológico.